

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecisiete (17) de julio de dos mil veinte (2020)

Auto de sustanciación No. 153

EXPEDIENTE No. 76-001-23-33-010-2017-01197-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARIA MELBA CARDONA ALVAREZ
DEMANDADO: UGPP

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

Estando el proceso para fallo, se advierte la necesidad de establecer el carácter de nacional, nacionalizado o territorial del nombramiento realizado a la docente María Melba Cardona Álvarez por el Jefe del Distrito Educativo No. 9 con Sede en el municipio de Cartago Valle (fl. 5 del expediente).

En consecuencia, de conformidad con lo autorizado por el inciso 2º del artículo 213 del C.P.A.C.A y con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda¹, el despacho decreta la siguiente prueba:

Librar oficio a la Secretaría de Educación del municipio de Cartago Valle, con el objeto de que certifique el carácter de nacional, nacionalizado o territorial del nombramiento realizado a la docente María Melba Cardona Álvarez identificada con cédula de ciudadanía No. 29.447.465, por el Jefe del Distrito Educativo No. 9 con Sede en el municipio de Cartago Valle mediante Resolución No. 161 del 25 de septiembre de 1980, para desempeñar funciones de profesora de tiempo completo en el Colegio José María Córdoba satélite del Corregimiento La María, municipio de El Águila.

Para el cumplimiento de lo anterior se otorga el término de diez (10) días.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR A. VALERO NISIMBLAT
Magistrado

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 2 de mayo de 2011: "Conforme al artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, **en materia de pruebas**, en cualquiera de las instancias, el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. (...) En conclusión, el Juez de la causa tiene el deber de efectuar todos los actos procesales que estén a su alcance para esclarecer la verdad del proceso y garantizar un real y efectivo goce y acceso a la administración de justicia, y de contera, proveer el debido proceso en todas sus dimensiones".